



Asamblea General

Septuagésimo período de sesiones

Documentos Oficiales

Distr. general
28 de octubre de 2015
Español
Original: inglés

Sexta Comisión

Acta resumida de la novena sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el viernes 16 de octubre de 2015, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Holovka (Vicepresidente) (Serbia)
más tarde: Sr. Charles (Presidente). (Trinidad y Tabago)

Sumario

Tema 80 del programa: Responsabilidad penal de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión

La presente acta está sujeta a correcciones. Dichas correcciones deberán enviarse lo antes posible, con la firma de un miembro de la delegación interesada, a la Jefa de la Dependencia de Control de Documentos (srcorrections@un.org), e incorporarse en un ejemplar del acta.

Las actas corregidas volverán a publicarse electrónicamente en el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones Unidas (<http://documents.un.org/>).

15-17964 (S)



Se ruega reciclar



En ausencia del Sr. Charles (Trinidad y Tabago), el Sr. Holovka (Serbia), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.

Tema 80 del programa: Responsabilidad penal de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión (A/70/208)

1. **El Sr. Gharibi** (República Islámica del Irán), hablando en nombre del Movimiento de los Países No Alineados, dice que el Movimiento espera con interés la continuación del examen en la Sexta Comisión del informe del Grupo de Expertos Jurídicos sobre la necesidad de garantizar la rendición de cuentas por parte del personal y los expertos de las Naciones Unidas en misión por los actos delictivos cometidos en las operaciones de mantenimiento de la paz (A/60/980). Asimismo, observa que la Estrategia Amplia de las Naciones Unidas sobre la Asistencia y el Apoyo a las Víctimas de la Explotación y los Abusos Sexuales Cometidos por Personal de las Naciones Unidas y Personal Asociado ayudará a mitigar el sufrimiento de las víctimas y ofrecerá apoyo social, servicios jurídicos y atención médica. También pone de relieve la necesidad de aplicar la resolución 61/291 de la Asamblea General lo antes posible, con el fin de reforzar los mecanismos de rendición de cuentas y velar por que se respeten las garantías procesales al investigar actos de explotación y abusos sexuales.

2. La plena aplicación por todos los Estados Miembros de las resoluciones de la Asamblea General 62/63, 63/119, 64/110 y 65/20 podrá ayudar a salvar cualquier laguna jurisdiccional. Posteriormente, se podrá llevar a cabo una evaluación para analizar si hace falta que la Asamblea General adopte más medidas; aunque se han aprobado importantes medidas de carácter normativo y correctivo, todavía no se han aplicado.

3. Todavía es prematuro debatir un proyecto de convención sobre la exigencia de responsabilidades penales a los funcionarios y los expertos de las Naciones Unidas en misión; por el momento, la Comisión deberá centrarse en las cuestiones sustantivas y dejar las cuestiones de forma para una etapa posterior.

4. **El Sr. Fornell** (Ecuador), hablando en nombre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Carib de conducta, especialmente la conducta delictiva,

cometida por personal de las Naciones Unidas en misión es completamente inaceptable y no debe quedar impune, ya que esos delitos causan un gran daño a las víctimas, al tiempo que menoscaban la reputación de las Naciones Unidas. La CELAC agradece al Secretario General sus informes sobre el asunto (A/70/208 y A/69/779). No obstante, está claro que a la comunidad internacional le queda mucho por hacer para que en ningún caso se tolere la impunidad en lo que respecta a esos delitos.

5. La CELAC acoge con agrado las iniciativas del Secretario General para responder a las denuncias de explotación y abusos sexuales de niños por personal de las Naciones Unidas y seguirá de cerca su evolución.

6. La CELAC toma nota en particular de la información que figura en las secciones IV y V del informe del Secretario General (A/70/208) sobre el proceso de comunicación de las denuncias verosímiles al Estado de la nacionalidad y el refuerzo de la capacitación actual sobre normas de conducta de las Naciones Unidas, y alienta a la Organización a que siga aplicando sus políticas de conformidad con la resolución 66/93 de la Asamblea General.

7. La CELAC toma nota de los esfuerzos de la Secretaría por estandarizar el proceso de notificación a los Estados Miembros de las denuncias graves de faltas de conducta relativas a miembros del personal uniformado desplegados como expertos en misión, que también debería seguirse para los incidentes en los que estén implicados funcionarios de las Naciones Unidas y expertos no uniformados en misión. La CELAC insta asimismo a los Estados a los que se hayan remitido casos a darles el debido seguimiento y a informar al Secretario General de cualquier medida que adopten, incluidos los enjuiciamientos, según proceda.

8. La CELAC reafirma su grave preocupación por los casos de explotación y abusos sexuales comunicados por el Secretario General (A/70/357) y apoya plenamente la política de tolerancia cero de la Organización en tales casos, así como la necesidad de observar el estado de derecho al aplicarla. En este sentido, resalta la responsabilidad compartida del Secretario General y los Estados Miembros de hacer todo lo posible por prevenir y sancionar las actividades delictivas llevadas a cabo por personas que trabajan para las Naciones Unidas y de hacer cumplir las normas de conducta pertinentes.

9. También hay que seguir examinando las cuestiones que afectan a las investigaciones y la recopilación de pruebas. La evaluación y el examen de las pruebas en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales siempre deben llevarse a cabo teniendo en cuenta los intereses de las presuntas víctimas y las garantías procesales de aquellos contra quienes se formularon acusaciones. Es importante que el personal de las Naciones Unidas cumpla las orientaciones normativas pertinentes en relación con las pautas de conducta que se espera que observe, incluidas las establecidas en los documentos A/67/775 y A/67/828.

10. **El Sr. Joyini** (Sudáfrica), hablando en nombre del Grupo Africano, dice que es lamentable que no se hayan recibido observaciones de los Estados acerca del párrafo 8 de la resolución 69/114 de la Asamblea General, en la que se invita a los Estados Miembros a que presenten nuevas observaciones sobre el informe del Grupo de Expertos Jurídicos (A/69/980), en particular respecto de las medidas que deben adoptarse en el futuro.

11. El Grupo Africano apoya la política de tolerancia cero con respecto a la conducta delictiva, en particular cuando se trata de la explotación y los abusos sexuales cometidos por funcionarios o expertos de las Naciones Unidas en misión. A su juicio, la responsabilidad penal es un pilar del estado de derecho y es crucial para la integridad y la eficacia de la Organización. El Grupo Africano alienta a los Estados Miembros a que ejerzan su jurisdicción en los casos que proceda para que los actos delictivos no queden impunes y señala que la existencia de lagunas jurisdiccionales para garantizar la rendición de cuentas propicia el delito, especialmente en las situaciones en que el Estado receptor no puede ejercer su jurisdicción penal sobre un presunto infractor y en los que el Estado del que es nacional esa persona no está en condiciones de hacer valer su jurisdicción respecto de los delitos cometidos en el Estado receptor. Si se aplican debidamente, las medidas correctivas adoptadas en virtud de varias resoluciones de la Asamblea General podrían atender a ese problema. El Grupo Africano encomia a la Organización por sus esfuerzos para remitir los casos que pudieran ser constitutivos de delito grave al Estado de la nacionalidad.

12. El Grupo Africano acoge con agrado las medidas que se están aplicando en materia de capacitación sobre normas de conducta de las Naciones Unidas y también la asistencia técnica ofrecida por las Naciones

Unidas a los Estados Miembros que la solicitan para elaborar su legislación penal interna relativa a delitos graves. Los Estados deben cooperar entre sí en las investigaciones penales o los procedimientos de extradición relativos a delitos graves cometidos por funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión.

13. **La Sra. Aching** (Trinidad y Tabago), hablando en nombre de la Comunidad del Caribe (CARICOM), dice que la Comunidad reconoce la valiosa contribución que realizan los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión para el cumplimiento de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. En la región de la CARICOM, el Estado de Haití se ha visto inmensamente favorecido por la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que ha trabajado por restablecer un entorno seguro y estable, promover el progreso político, fortalecer el estado de derecho y promover y proteger los derechos humanos.

14. La CARICOM sigue profundamente preocupada, sin embargo, por las recientes acusaciones de mala conducta y abusos sexuales de mujeres y niños cometidos en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, que constituyen una grave violación del derecho internacional y socavan la credibilidad de las Naciones Unidas. De conformidad con lo dispuesto en la resolución 69/114 de la Asamblea General, los autores de esos delitos atroces deben rendir cuentas de sus actos. Los Estados deben establecer su jurisdicción sobre los delitos que cometan sus nacionales mientras prestan servicios en misiones de mantenimiento de la paz. Además, el establecimiento de un reglamento común que regule la conducta y el trato de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión contribuirá también a velar por que rindan cuentas de sus actos aquellos que con su conducta sobre el terreno desacrediten a las Naciones Unidas.

15. La CARICOM encomia al Secretario General por promover una política de tolerancia cero, que ayudará a restablecer la fe y la confianza en el sistema de las Naciones Unidas. Por otra parte, la capacitación de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión sobre la necesidad de respetar las leyes nacionales del Estado receptor y las normas de conducta de las Naciones Unidas será un instrumento importante para resolver el problema.

16. **La Sra. Mezdrea** (Observadora de la Unión Europea), hablando también en representación de los países candidatos Albania, la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía; de Bosnia y Herzegovina, país del proceso de estabilización y de asociación; y, además, de Georgia, Liechtenstein, Noruega, la República de Moldova y Ucrania, dice que su delegación apoya firmemente una política de tolerancia cero para los delitos cometidos por funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión y, de forma más general, un enfoque coherente para establecer la “edad de rendición de cuentas”, en particular en el caso de delitos graves.

17. Su delegación apoya sin reservas la iniciativa Los Derechos Humanos Primero y acoge con agrado las medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales que figuran en el informe del Secretario General (A/69/779). Con respecto a las recientes acusaciones de explotación y abusos sexuales cometidos por personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en la República Centroafricana, la oradora observa las medidas correctivas adoptadas por las Naciones Unidas y comparte la opinión del Secretario General de que es necesario hacer mucho más para terminar con las conductas inaceptables: hay que denunciar, las investigaciones deben ser rápidas y minuciosas y los responsables deben ser castigados.

18. La Unión Europea apoya también la exigencia de liderazgo y rendición de cuentas que figura en el informe y acoge con agrado la creación de equipos de respuesta inmediata, la imposición de sanciones fuertes a las misiones y la distribución a las misiones de orientación detallada sobre las normas y procedimientos para alertar a la Sede de las Naciones Unidas. También acoge con agrado la intención de conectar con las comunidades afectadas y de crear un programa de asistencia a las víctimas que cuente con recursos suficientes, entre otras medidas que figuran en el informe.

19. Para que haya verdadera rendición de cuentas, hace falta que los Estados cooperen entre sí y con las Naciones Unidas en la investigación de las denuncias de faltas de conducta y delitos cometidos por el personal nacional. La Organización debe informar con prontitud al Estado de la nacionalidad del supuesto infractor a fin de establecer la jurisdicción necesaria para investigar y enjuiciar esos delitos cuando corresponda. Si bien incumbe a los propios Estados la responsabilidad primordial de llevar a los infractores

ante la justicia, la Corte Penal Internacional deberá ejercer su jurisdicción cuando se cumplan los requisitos previos establecidos y las autoridades nacionales no puedan o no quieran enjuiciar los crímenes más graves.

20. Su delegación sigue respaldando el criterio doble, que combina medidas a corto y largo plazo, a fin de abordar las lagunas en materia de jurisdicción. A largo plazo, la Unión Europea sigue dispuesta a examinar la propuesta de establecer un marco jurídico internacional amplio que aclare las circunstancias en que los Estados podrían ejercer su jurisdicción, así como las categorías de personas y delitos sujetos a esa jurisdicción.

21. **La Sra. Stener** (Noruega), hablando en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), dice que la gran mayoría de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión realiza sacrificios personales en aras del interés común de los Estados Miembros; no obstante, unos pocos cometen delitos graves mientras están de misión. Tanto si esos crímenes se ponen en conocimiento del público como si no, la impresión de impunidad sigue planteando un problema grave para la credibilidad de la Organización y su relación con las comunidades locales.

22. Es preocupante que las Naciones Unidas hayan recibido pocas respuestas de los Estados indicando el seguimiento dado en sus respectivas jurisdicciones nacionales a las denuncias de faltas de conducta. Si se repasan los informes presentados por los Estados desde 2007, a pesar de que se han puesto en conocimiento de los Estados de origen hasta 84 casos de conducta delictiva, esos Estados solo informaron sobre el seguimiento dado en 15 casos. Además, en el informe del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las Operaciones de Paz (A/70/95-S/2015/446) se señala que, incluso diez años después de que la Organización comenzara a abordar sistemáticamente el problema de la explotación y los abusos sexuales en las operaciones de mantenimiento de la paz, siguen existiendo graves deficiencias.

23. Ha llegado el momento de endurecer el lenguaje de la resolución relativa a ese tema, de acuerdo con las recomendaciones del informe del Grupo de Expertos. En la resolución del año en curso se deberá solicitar a los Estados Miembros que proporcionen información a la Secretaría sobre el seguimiento dado en sus jurisdicciones nacionales a los casos que les han

remitido no solo en el año del informe, sino también en años anteriores. Ha llegado el momento de que en el informe del Secretario General se mencione a los Estados que no proporcionan información sobre las medidas adoptadas en sus jurisdicciones nacionales para dar seguimiento a las denuncias de presuntas faltas de conducta.

24. **El Sr. O'Sullivan** (Australia), hablando también en nombre del Canadá y Nueva Zelandia, dice que solo un pequeño número de funcionarios y expertos en misión cometen delitos en el desempeño de sus funciones, frente a la inmensa mayoría que lleva a cabo la labor de la Organización cumpliendo las normas más estrictas, pero ese pequeño número pone en tela de juicio la reputación, la credibilidad, la imparcialidad y la integridad de las Naciones Unidas. Al no obligar a esos pocos a rendir cuentas se corre el riesgo de empañar las relaciones entre las Naciones Unidas y la población local; también se socava el éxito de la operación y los esfuerzos más generales por promover el estado de derecho, la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos.

25. Las tres delegaciones observan que, según el informe del Secretario General (A/70/208), la Oficina de Asuntos Jurídicos comunicó a los Estados de la nacionalidad los casos de 22 funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión para su investigación y posible enjuiciamiento, y celebran que la Secretaría siga dispuesta a prestar asistencia en relación con todos los casos comunicados. Asimismo, observan los esfuerzos de los Estados Miembros para establecer su jurisdicción sobre los delitos graves cometidos por sus funcionarios y expertos en misión y felicitan a los Estados que han tomado medidas para garantizar que sus nacionales, siempre que sea necesario, puedan ser investigados y enjuiciados. En este sentido, exhortan a todos los Estados a que informen a las Naciones Unidas sobre los progresos y los resultados de las medidas adoptadas para investigar y enjuiciar esos delitos de manera oportuna.

26. Dado que más vale prevenir que curar, las tres delegaciones apoyan también la capacitación de soldados y policías a fin de que puedan contribuir plena y eficazmente a las operaciones de mantenimiento de la paz. Las Naciones Unidas deberán hacer el seguimiento de los casos remitidos a los Estados de la nacionalidad de manera periódica, y a un nivel superior, para asegurarse de que la Organización

hace todo lo posible a fin de alentar a los Estados a cumplir sus responsabilidades.

27. Los tres países instan a la Secretaría a aprender de la experiencia adquirida con las denuncias de explotación y abusos sexuales en la República Centroafricana y a subrayar la necesidad de que se presenten informes completos y adecuados dentro del sistema de las Naciones Unidas. Para disponer de un buen sistema de presentación de informes es preciso aplicar plenamente el boletín del Secretario General relativo a la protección contra las represalias por denunciar faltas de conducta o colaborar en auditorías o investigaciones debidamente autorizadas (ST/SGB/2005/21).

28. En principio, los tres países apoyan la propuesta de elaborar una convención que exija a los Estados Miembros ejercer la jurisdicción penal sobre sus nacionales que participen en operaciones de las Naciones Unidas en el extranjero. También sería útil tener más claro el alcance y la magnitud de las denuncias contra distintos tipos de personal de las Naciones Unidas y las medidas que la Organización o las autoridades nacionales han adoptado en consecuencia.

29. **La Sra. Rodríguez Pineda** (Guatemala) dice que las faltas de conducta de los funcionarios y expertos en misión no pueden quedar impunes, particularmente debido a la naturaleza de sus funciones y la especial vulnerabilidad de las personas que son víctimas en esos casos. El problema jurídico de base reside en el hecho, de un lado, de que el estatuto jurídico de este personal de las Naciones Unidas —con las inmunidades que conlleva— puede facilitar la elusión de la jurisdicción penal del Estado receptor, y, de otro lado, que las Naciones Unidas solo pueden ejercer medidas disciplinarias sobre su personal, ya que no tiene posibilidades de ejercer jurisdicción penal.

30. Durante los debates del Grupo de Trabajo, a su delegación le gustaría abordar las siguientes cuestiones: en primer lugar, el Grupo de Trabajo debe considerar la necesidad de reevaluar el mandato conferido a la Sexta Comisión sobre la base del informe del Grupo de Expertos Jurídicos (A/60/980, párr. 11), en el que se indica que las recomendaciones de su informe deben ser aplicables a todas las personas que prestan servicios en operaciones de mantenimiento de la paz, cualquiera que sea el departamento o el órgano o programa administrados independientemente

del que hayan sido destacadas. Teniendo en cuenta el proceso de revisión de operaciones de paz, conviene ampliar las deliberaciones al resto del personal de las Naciones Unidas, tanto en la Sede como en el terreno.

31. En segundo lugar, su delegación considera sumamente preocupante el hecho de que 2 de los 22 casos de explotación y abusos sexuales comunicados a los Estados de la nacionalidad durante el período abarcado en el informe del Secretario General (A/70/208) para su investigación y posible enjuiciamiento eran con menores. Guatemala condena enfáticamente esos actos y exige la aplicación de la política de tolerancia cero de la Organización. En tercer lugar, la Comisión debe coordinar sus trabajos con los de la Cuarta y la Quinta Comisión en cuanto a los procesos de revisión y reforma en curso. Hay que tomar medidas para corregir las debilidades de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, particularmente con el manejo de las acusaciones de explotación y abusos sexuales en la República Centroafricana, y es necesario reforzar el intercambio de información, los programas de protección de personas que denuncian situaciones ilegales, la imposición de medidas firmes disciplinarias y un mayor escrutinio para el levantamiento de la inmunidad diplomática.

32. Por último, la oradora observa que las numerosas fuentes de casos de mala conducta no permiten un diagnóstico completo del problema y que, para considerar medidas adicionales, es necesario contar con mejores mecanismos de reporte y con información más consistente.

33. *El Sr. Charles (Trinidad y Tabago) ocupa la Presidencia.*

34. **El Sr. Waweru** (Kenya) dice que es de extrema importancia que los delitos cometidos por las personas vinculadas a las Naciones Unidas sean debidamente investigados y enjuiciados de manera oportuna, de conformidad con las distintas convenciones sobre relaciones diplomáticas, prerrogativas e inmunidades. Su país apoya la política de tolerancia cero, en particular en los casos relacionados con la explotación y los abusos sexuales.

35. Kenya ha reforzado recientemente su sistema de justicia penal y de gobernanza tras la promulgación de la Constitución en 2010, de manera que las medidas de rendición de cuentas en instituciones clave como el poder judicial, la Fiscalía General y la policía han sido

reforzadas para que puedan cumplir su mandato de conformidad con la ley y con arreglo a criterios estrictos. Por lo tanto, Kenya está en condiciones de enjuiciar a nacionales que cometan delitos graves en la suya o en otra jurisdicción cuando prestan servicios en misiones de las Naciones Unidas. A este respecto, la principal dificultad es que el proceso para lograr que el Secretario General levante la inmunidad lleva bastante tiempo, lo cual retrasa el proceso penal. A pesar de las deficiencias existentes en la legislación y la capacidad de ejercer jurisdicción, su delegación alienta a los Estados Miembros a terminar con la impunidad y velar por que los actos delictivos no queden sin castigo.

36. La falta de una ley integral que permita pasar sin tropiezos de la denuncia a la investigación agrava el problema. Por otro lado, si se aplican debidamente, las medidas correctivas adoptadas en virtud de varias resoluciones de la Asamblea General podrían subsanar esas dificultades. Sin embargo, su delegación también aboga por que se elabore una ley modelo que oriente a los Estados para tratar los problemas y, en última instancia, los ayude a reproducirla en sus respectivos ordenamientos jurídicos.

37. Su delegación acoge con beneplácito las medidas adoptadas para proporcionar capacitación sobre las normas de conducta de las Naciones Unidas, en particular mediante la capacitación previa al despliegue y la que se imparte al inicio de la misión, y celebra también la asistencia técnica que ofrece la Organización a los Estados Miembros que la soliciten para elaborar su derecho penal interno. El orador pide una cooperación más estrecha entre los Estados en las investigaciones penales o los procedimientos de extradición relativos a delitos graves cometidos por funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión.

38. **El Sr. Treger** (Israel) dice que a su delegación le preocupa que si los delitos cometidos por funcionarios de las Naciones Unidas no se investigan debidamente, esto perjudique al mandato de las Naciones Unidas, especialmente en lo que respecta a las relaciones entre las Naciones Unidas y el país receptor. En ese sentido, está deseando ver cómo elaborarán los distintos Estados sus leyes nacionales sobre las actividades delictivas de los ciudadanos que participan en misiones de las Naciones Unidas, e insta a los Estados Miembros a que adopten las medidas adecuadas para que esos crímenes no queden impunes.

39. Observando que la Oficina de Asuntos Jurídicos ha remitido a los Estados 22 casos para que investiguen y, si procede, enjuicien a nacionales que han prestado servicios como funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión (A/70/208, párr. 28), su delegación insta a esos Estados a mantener informada a la Organización sobre las acciones emprendidas al respecto por las correspondientes autoridades nacionales.

40. Su delegación celebra que la Organización haya decidido instar a los Estados a que adopten todas las medidas necesarias para asegurar que los delitos cometidos por los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión no queden impunes y de instar al Secretario General a seguir adoptando medidas prácticas en el ámbito de sus facultades a fin de reforzar la capacitación existente sobre las normas de conducta de las Naciones Unidas. Con esas iniciativas se sensibilizará a los Estados sobre la cuestión de la conducta correcta y la prevención de los delitos cometidos por los nacionales que prestan servicios en misiones de las Naciones Unidas.

41. **La Sra. Carnal** (Suiza) dice que los Estados Miembros y el Secretario General tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para prevenir la comisión de delitos por funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión y de velar por que esos delitos no queden impunes. Su delegación acoge con beneplácito todas las medidas destinadas a mejorar el sistema de presentación de informes y pone de relieve las recomendaciones contenidas en el informe reciente del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las Operaciones de Paz (A/70/357-S/2015/682). El Secretario General debe nombrar a los Estados afectados; además, en vista de que los informes presentados están incompletos, en la resolución del año en curso se deberá solicitar explícitamente a los Estados Miembros que informen del avance de las investigaciones, los enjuiciamientos y las medidas disciplinarias en sus jurisdicciones, incluidos los relativos a casos originados en años anteriores, y que informen sobre las medidas concretas adoptadas para impedir que esos actos se repitan.

42. Una medida adecuada para hacer frente a los problemas de manera eficaz y sostenible sería la elaboración de una convención internacional en la que los Estados partes puedan, por ejemplo, comprometerse simplemente a ampliar su jurisdicción de manera que abarque los delitos graves cometidos por sus

ciudadanos mientras estén en misión y a adoptar medidas para prevenir la comisión de esos delitos. Su delegación apoya el establecimiento de un comité especial entre períodos de sesiones o un mecanismo similar para debatir el contenido de la posible convención.

43. **La Sra. Elgarf** (Egipto) dice que el tema es particularmente importante en África, donde hay desplegadas varias operaciones de mantenimiento de la paz, y que su delegación hace suyo el enfoque de tolerancia cero para todos los delitos cometidos por funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión, en particular los delitos graves, que deben ser enjuiciados en la jurisdicción del Estado de nacionalidad del presunto autor. Además, pide que se ayude a esos Estados a colmar las lagunas legislativas a fin de que puedan asumir esa responsabilidad. La legislación de Egipto dispone que los presuntos responsables de esos delitos sean investigados y enjuiciados inmediatamente; asimismo, se proporciona a los nacionales que participan en misiones de las Naciones Unidas capacitación sobre las normas de conducta y sobre las leyes de los países receptores.

44. **La Sra. Thanarat** (Tailandia) dice que la impunidad socava la integridad, la credibilidad y la eficacia de las Naciones Unidas y sus operaciones de mantenimiento de la paz; por eso, Tailandia ha participado activamente en la Cumbre de Líderes sobre el Mantenimiento de la Paz, celebrada en septiembre de 2015, y se adhiere a su declaración de que la conducta correcta y la disciplina de todo el personal desplegado en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas son vitales para su eficacia. Su delegación también reafirma el apoyo a la política de tolerancia cero de la Organización respecto de todas las formas de explotación y abusos sexuales.

45. Como país que aporta contingentes, Tailandia considera fundamental que el personal de mantenimiento de la paz comprenda sus mandatos y su condición, por lo tanto, reitera la importancia de la capacitación previa al despliegue y la orientación en las misiones sobre la exigencia de respetar las normas de conducta de las Naciones Unidas y observar las leyes del país receptor. A ese respecto, aprecia los esfuerzos del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno para prestar apoyo técnico en la capacitación previa al despliegue de funcionarios y policías tailandeses.

46. Tailandia apoya la creciente participación de las mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz; ha aportado varias funcionarias que en su mayoría trabajan en el ámbito de la violencia por razón de género y en el fomento de medidas de prevención y protección para las mujeres y las niñas vulnerables. El personal femenino de mantenimiento de la paz desempeña un papel crucial en el apoyo a los supervivientes y los testigos. Se espera que la tendencia natural de las mujeres que han sido víctimas de este tipo de actos de abrirse al personal femenino de mantenimiento de la paz ayude a aumentar el número de denuncias de incidentes y a reducir el número de delitos que quedan impunes.

47. Su delegación insta a los Estados a que consideren la posibilidad de establecer su jurisdicción respecto de los delitos graves cometidos por sus nacionales mientras prestan servicios en misiones de las Naciones Unidas, apoya los esfuerzos del Secretario General por levantar la inmunidad de los presuntos autores y respalda firmemente la cooperación entre los Estados a ese respecto.

48. **El Sr. Rao** (India) dice que es preocupante ver el aumento en el número de casos de funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión que se remite a los Estados para su investigación y enjuiciamiento. Observa con aprecio la información contenida en el informe del Secretario General (A/70/208, párr. 36) de que las actividades de sensibilización siguen poniendo de relieve las obligaciones de todo el personal de las Naciones Unidas de respetar las leyes del Estado receptor y también las consecuencias de no hacerlo.

49. La aplicación de la resolución 69/114 de la Asamblea General, en la que se insta a todos los Estados a que consideren la posibilidad de establecer su competencia respecto de los delitos cometidos por sus nacionales mientras presten servicios como funcionarios o expertos de las Naciones Unidas en misión, ayudará a colmar la laguna jurisdiccional respecto de los Estados Miembros que no afirman la jurisdicción extraterritorial sobre los delitos cometidos por sus nacionales en el extranjero.

50. Las infracciones cometidas por funcionarios o expertos de las Naciones Unidas en misión no requieren la elaboración de una convención internacional, pero los Estados Miembros deberán asegurarse de que sus leyes incorporan la jurisdicción y

cuentan con las disposiciones adecuadas para el enjuiciamiento si sus nacionales incurren en ese tipo de conducta. En ese sentido, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal de la India contienen disposiciones para hacer frente a los delitos extraterritoriales cometidos por nacionales indios y para solicitar y prestar asistencia en asuntos penales. La Ley de Extradición de la India de 1962 se ocupa de la extradición de delincuentes fugitivos y permite la extradición en virtud de un tratado bilateral o una convención internacional.

51. **El Sr. Pham** Quang Hieu (Viet Nam), si bien reconoce la valiosa contribución del personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas al cumplimiento de los propósitos y principios de la Carta, sostiene que esas personas deben respetar tanto las leyes nacionales del Estado receptor como las del país de nacionalidad y reafirma el apoyo de su delegación a la política de tolerancia cero con respecto a todas las formas de explotación y abusos sexuales.

52. El orador subraya la importancia de adoptar las medidas adecuadas para subsanar las lagunas jurisdiccionales a fin de evitar que los delitos graves cometidos por funcionarios de las Naciones Unidas en misión queden impunes. Para ello, Viet Nam ha adoptado una disposición en su Código Penal que permite el ejercicio de la jurisdicción respecto de los delitos cometidos por vietnamitas en otros países en determinadas circunstancias y también ha concertado numerosos acuerdos con otros países en materia de extradición y asistencia judicial recíproca en asuntos penales.

53. Su delegación apoya plenamente los continuos esfuerzos del Secretario General por impartir al personal de las Naciones Unidas capacitación previa al despliegue y al inicio de la misión. Sin embargo, cada Estado Miembro tiene también el deber de trabajar por poner fin a la impunidad y prevenir la comisión de delitos, y con ese fin, Viet Nam creó en 2014 el Centro de Mantenimiento de la Paz de Viet Nam, encargado de impartir a los funcionarios capacitación en el país antes del despliegue, con la aspiración de que llegue a ser una fuente de personal con talento y dedicación.

54. **El Sr. Remaoun** (Argelia) dice que a su delegación le preocupa la persistencia de casos de explotación y abusos sexuales y que hay que impedir a toda costa que las acciones de las Naciones Unidas causen más sufrimiento a la gente a la que se supone

que han de servir. Por lo tanto, la labor de la Comisión en relación con ese tema del programa es cada vez más urgente, teniendo en cuenta que las misiones políticas especiales y las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas incluyen más de 120.000 personas repartidas en 39 misiones.

55. El orador acoge con agrado el establecimiento de equipos de tareas permanentes contra la explotación y los abusos sexuales en la mayoría de las operaciones de mantenimiento de la paz y expresa la esperanza de que se alcance el objetivo de crear equipos de respuesta inmediata encargados de reunir y preservar pruebas en un plazo de 72 horas desde la recepción de una denuncia. Su delegación también aprecia que a principios de 2016 se vaya a distribuir a las misiones orientación detallada sobre las normas y procedimientos para alertar a la Sede de las Naciones Unidas de los casos de actos delictivos cometidos por el personal civil, militar o de policía. En ese sentido, su delegación está dispuesta a cooperar a fin de concluir el debate pendiente sobre un proyecto de convención internacional para garantizar la rendición de cuentas del personal de las Naciones Unidas en relación con los delitos cometidos en las operaciones de mantenimiento de la paz.

56. Otro acontecimiento positivo es la ejecución de las medidas prácticas y preventivas adoptadas por las misiones sobre el terreno para reforzar la capacitación existente sobre las normas de conducta de las Naciones Unidas. Las lecciones aprendidas con respecto a la prevención podrían aplicarse también a las organizaciones regionales como la Unión Africana y, a ese respecto, el orador hace notar las medidas que está adoptando la Comisión de la Unión Africana para concluir un Marco Conjunto de las Naciones Unidas y la Unión Africana para una Alianza Reforzada en materia de Paz y Seguridad.

57. **La Sra. Kamara** (Liberia) dice que, si bien su delegación encomia las medidas adoptadas por las Naciones Unidas para que las personas rindan cuentas de sus actos, no puede estar más de acuerdo con la afirmación de que la conducta de ciertos elementos de la comunidad de mantenimiento de la paz constituye una violación flagrante de la obligación fundamental de proteger. Liberia apoya la política de tolerancia cero de la explotación y los abusos sexuales y también el ejercicio de la jurisdicción por los Estados Miembros en los casos en que sus ciudadanos parecen ser objeto de investigación. Por lo tanto, su delegación insta a los

Estados a los que se hayan remitido casos a que cumplan su compromiso de investigar y enjuiciar, ya que no adoptar medidas equivale a consentir la impunidad.

58. Es preciso esforzarse más para dar una solución jurídica a los gravísimos delitos que se están cometiendo, incluso alentando a los denunciantes de irregularidades a que los saquen a la luz. Son aún más inquietantes los informes recientes de que se había castigado a un denunciante por dar información sobre la conducta delictiva del personal de las Naciones Unidas destacado en misiones de mantenimiento de la paz. Aprobar una convención, como recomienda el Grupo de Expertos Jurídicos, a fin de asegurar que el personal y los expertos de las Naciones Unidas en misión sean responsables de sus acciones podría ser un paso en la buena dirección.

59. **La Sra. Butts** (Estados Unidos de América) dice que los Estados Unidos apoyan plenamente la política de la Organización de tolerancia cero contra la explotación y los abusos sexuales y que respaldan las estrictas medidas del Secretario General encaminadas a erradicar esas lacras de las operaciones de mantenimiento de la paz, como el fortalecimiento de los mecanismos de investigación de denuncias.

60. En los últimos meses, las denuncias particularmente atroces de explotación y abusos sexuales en las operaciones de mantenimiento de la paz han venido acompañadas de informes desalentadores del Grupo de Expertos Independiente y de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, en los que se indica que muchos casos no se denuncian y que las Naciones Unidas son incapaces de hacer cumplir la prohibición de las relaciones sexuales transaccionales y basadas en la explotación entre el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y miembros de la población de los países receptores. Su delegación aguarda con interés la plena aplicación de las iniciativas destacadas en el informe del Secretario General sobre medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales (A/69/779). La Comisión deberá examinar con atención y reforzar debidamente su resolución anual sobre la responsabilidad penal, que podría incluir nuevas medidas destinadas a mejorar la presentación de informes sobre los casos y el seguimiento dado, e iniciativas prácticas, como integrar el informe anual sobre responsabilidad penal en el informe global relativo a la explotación y los abusos sexuales.

61. Su delegación está considerando activamente si una convención podría desempeñar un papel útil para ayudar a cerrar las posibles lagunas de los sistemas jurídicos nacionales que impiden a los Estados Miembros enjuiciar a sus propios nacionales. La legislación federal de los Estados Unidos permite el enjuiciamiento de estadounidenses por delitos cometidos en el extranjero, incluidos el abuso sexual de niños, la trata de personas, el soborno de funcionarios extranjeros y otros delitos graves en determinadas circunstancias.

62. Dado que las Naciones Unidas no pueden enjuiciar a los presuntos autores de actos de explotación y abusos sexuales, corresponde a los Estados Miembros adoptar medidas apropiadas para que los delincuentes rindan cuentas. Es alentador escuchar la respuesta tan firme y positiva que han dado los países que aportan contingentes y fuerzas de policía al llamamiento del Secretario General a favor de la rendición de cuentas en las consultas del Consejo de Seguridad celebradas el 17 de septiembre de 2015.

63. **El Sr. Daté** (Côte d'Ivoire) dice que su delegación apoya firmemente las diversas resoluciones de la Asamblea General en las que se insta a los Estados a que adopten todas las medidas necesarias para asegurar que los delitos cometidos por los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión no queden impunes y los responsables de dichos delitos sean llevados ante la justicia, sin perjuicio de las prerrogativas e inmunidades de esas personas y de las Naciones Unidas con arreglo al derecho internacional y de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, incluidas las debidas garantías procesales.

64. El orador da las gracias al Secretario General por su excelente informe sobre el tema (A/70/208) e insta a los Estados a considerar la posibilidad de establecer su jurisdicción respecto de los delitos, en particular los de carácter grave, cometidos por sus nacionales mientras prestan servicios como funcionarios o expertos de las Naciones Unidas en misión. La presencia de las Naciones Unidas debe tranquilizar a las poblaciones y las partes en conflicto, en lugar de inspirar miedo; por lo tanto, los miembros de las misiones deben estar por encima de toda sospecha. Se requiere una estrecha colaboración entre los Estados Miembros para investigar y enjuiciar esos delitos con eficacia.

65. **El Sr. Onn** (Malasia) dice que su delegación lamenta las denuncias de casos de explotación y abusos sexuales presuntamente cometidos por funcionarios y

expertos de las Naciones Unidas en misión. Dada la enorme complejidad que entraña garantizar la responsabilidad penal sin la cooperación del Estado acreditante, la labor de la Asamblea General y sus Comisiones Principales sobre esta cuestión es de gran importancia para que se establezcan las medidas preventivas adecuadas mediante la capacitación previa al despliegue y las actividades de concienciación en cuanto a la disponibilidad de mecanismos de justicia penal cuando se producen delitos tan sumamente graves.

66. Por su parte, Malasia tiene jurisdicción sobre los delitos cometidos por su personal militar en calidad de funcionarios y expertos en misión, en virtud de la Ley de las Fuerzas Armadas de 1972, cuyas disposiciones se siguen aplicando a ese personal dondequiera que esté destinado. Malasia también podría reclamar la jurisdicción penal extraterritorial sobre delitos graves como el terrorismo, los delitos contra el Estado, la corrupción, el blanqueo de dinero, el tráfico de drogas y la trata de personas.

67. Su delegación apoya el llamamiento que se hace en la resolución 69/114 de la Asamblea General para que todos los Estados cooperen entre sí y con las Naciones Unidas para intercambiar información y facilitar la realización de investigaciones y los enjuiciamientos. La Ley de Extradición de Malasia de 1992 y la Ley de Asistencia Mutua en Asuntos Penales de 2002, junto con su *corpus* de tratados sobre la cuestión, constituyen la base jurídica para ese tipo de cooperación internacional.

68. Con respecto al examen de un proyecto de convención, su delegación opina que las cuestiones que hay que seguir deliberando en detalle son la definición de los términos que se utilizarán en todo el texto del proyecto de convención, especialmente los relativos a "delitos graves", el ámbito de aplicación, la limitación de los tipos de delito y el principio de la doble incriminación.

69. **El Sr. Zamora Rivas** (El Salvador) dice que para su país, uno de los Estados beneficiados por las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, el tema de la responsabilidad penal es de gran relevancia, pues reconoce las diversas dificultades que enfrentan los Estados y la especial vulnerabilidad de su población en situaciones como conflictos armados y catástrofes. Por ello, su delegación está convencida de que esas circunstancias exigen que toda misión en el marco de las Naciones Unidas se lleve a cabo atendiendo rigurosamente los propósitos y principios

de la Carta de la Organización y todas las obligaciones que se derivan del estado de derecho.

70. El Salvador ha tomado diversas medidas para establecer su competencia respecto de los delitos cometidos por sus nacionales que presten servicios como funcionarios o expertos de las Naciones Unidas en misión. Por ejemplo, en enero de 2015, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial Transitoria para la Aplicación de la Resolución 2100 (2013) del Consejo de Seguridad, relativa al Establecimiento de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA). Ya que esa ley tiene por objeto regular la colaboración de El Salvador en la MINUSMA, se han incluido disposiciones que tienen como objetivo principal asegurar que los posibles delitos cometidos sean debidamente juzgados en El Salvador. Así, su artículo 5 indica que el personal del contingente de El Salvador tendrá la responsabilidad de respetar las leyes o costumbres locales y abstenerse de cualquier actividad inconsistente con el espíritu de la misión; además, establece expresamente la jurisdicción sobre ese personal.

71. Su delegación apoya firmemente la política de la Organización de tolerancia cero de la explotación y los abusos sexuales y subraya la necesidad de introducir reformas para que los mecanismos de investigación de las Naciones Unidas sean eficientes, imparciales y autónomos.

72. **El Sr. Atlassi** (Marruecos) dice que a su delegación le complace que la Asamblea General haya aprobado la resolución 69/114, puesto que se refiere a los esfuerzos de la comunidad internacional por combatir la impunidad de los delitos graves cometidos por funcionarios o expertos de las Naciones Unidas en misión. Todos los delitos que cometan esas personas deben ser juzgados en los tribunales nacionales competentes del Estado de nacionalidad del presunto autor. Su delegación está convencida de la necesidad de que los Estados aúnen esfuerzos entre sí y con las Naciones Unidas, especialmente en lo que respecta a las denuncias de delitos penales, y de que intercambien información y promuevan medidas para facilitar las investigaciones y los enjuiciamientos.

73. Su delegación reconoce la importancia de reforzar el mecanismo para prevenir la impunidad y de los esfuerzos paralelos para prevenir las faltas de conducta, mejorar la capacitación jurídica del personal

civil y militar de cada Estado acerca de su responsabilidad penal en virtud del derecho nacional e internacional y sensibilizar a ese personal sobre los procedimientos aplicables cuando se cometen delitos.

74. La legitimidad de las acciones de la Organización depende en gran medida del grado de confianza que depositen en ella. Los delitos cometidos por quienes prestan servicio en misiones de las Naciones Unidas no solo perjudican a las víctimas y al país receptor, sino también a la comunidad internacional en su conjunto. Para preservar su credibilidad, los Estados Miembros deben aunar esfuerzos para que esos delitos no queden impunes. Asimismo, cuando se haya determinado mediante una investigación administrativa de una denuncia de un delito grave que la acusación es infundada, la Organización debe tomar todas las medidas necesarias para restablecer la reputación del funcionario o experto afectado.

75. **El Sr. Leonidchenko** (Federación de Rusia) dice que su Gobierno apoya plenamente la política de tolerancia cero con respecto a los crímenes perpetrados por los funcionarios de las Naciones Unidas y considera que la Organización debe centrar sus esfuerzos en impedir que se cometan esos delitos. Su delegación se muestra particularmente preocupada por los casos existentes de explotación y abusos sexuales cometidos por personal de las Naciones Unidas y considera que deberían investigarse cumpliendo de manera estricta el derecho internacional, de modo que la función principal del ejercicio de la jurisdicción corresponda al Estado de la nacionalidad del funcionario.

76. La serie de medidas preventivas elaborada con la participación de la Asamblea General responde, en líneas generales, a la magnitud del problema. Es primordial que la Secretaría informe plenamente y de inmediato al Estado interesado sobre los casos de los ciudadanos de ese país que trabajen al servicio de las Naciones Unidas y sean sospechosos de haber cometido delitos.

77. Su delegación celebra y encomia la instrucción y capacitación preliminares de las personas que participan en operaciones de mantenimiento de la paz y misiones políticas especiales.

Se levanta la sesión a las 17.25 horas.